**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL**

Bogotá D.C. ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020)

Referencia 11001 40 03 057 2020 0570 00 Acción de Tutela

Resuelve el Despacho en primera instancia la acción de tutela de la referencia.

ANTECEDENTES

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta Política de Colombia, en concordancia con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y el inciso 1, artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1983 de 2017, este Despacho Judicial es competente para tramitar la acción de tutela presentada por el señor Luis Eduardo Ramírez Cortes, contra Seguros del Estado S.A. representado por el señor Jesús Enrique Camacho Gutiérrez en calidad de suplente del presidente y representante legal, por la presunta vulneración del derecho fundamental de petición.

2. La situación fáctica planteada por el actor, se resume de la siguiente manera:

2.1. El 4 de junio de 2020, elevó derecho de petición ante la entidad cuestionada para que se sirviera informar, sobre la decisión final de la reclamación presentada frente a la póliza de cumplimiento a favor de la Agrupación de Vivienda Quintas de Santa Barbara V Etapa y por los posibles perjuicios que se pudieran ocasionar la sociedad Consultoría Integral AOH SAS., la cual no ha sido contestada a la fecha de interposición del libelo.

2.2. Advierte que la entidad encartada puso en conocimiento de la referida copropiedad su reclamación, lo cual desató censuras e instigamientos en su contra por parte de la administración, vulnerando de igual forma su derecho de habeas data, al divulgarse su petición.

3. Pretende a través de esta queja el amparo del derecho fundamental de petición, ordenándose a Seguros del Estado S.A. representado por el señor Jesús Enrique Camacho Gutiérrez en calidad de suplente del presidente y representante legal, que responda la solicitud incoada el 4 de junio de 2020.

TRAMITE PROCESAL

2.1. Este Despacho Judicial avocó conocimiento de la acción constitucional mediante proveído de 28 de septiembre del año que avanza ordenándose la notificación de la cuestionada Seguros del Estado S.A.

2.2. Surtida en debida forma la notificación de Seguros del Estado S.A., procedió a dar contestación a la queja constitucional, manifestando en síntesis que la petición radicada el 4 de junio de 2020 por parte de Luis Eduardo Ramírez Cortés, Ángela Antonia Hernández Parejo y Dora Elizabeth Molina Rodríguez, en calidad de copropietarios de la Agrupación de Vivienda Quintas de Santa Barbara V Etapa, fue contestada de manera negativa el día nueve del mismo mes y año.

Agregando que el señor Luis Eduardo Ramírez Cortés, no ostenta la calidad de tomador, asegurado, o beneficiario del contrato de seguro, motivo por el cual no es posible entregar copia de las actuaciones adelantadas, ni las decisiones generadas dentro del proceso de reclamación del contrato de seguro.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela consagrada en la Constitución Política de 1991, se creó como una vía sumaria, preferente, y perentoria para proteger los derechos fundamentales, que hayan sido amenazados o violentados por las autoridades públicas o los particulares. En dicho evento, cualquier sujeto que se encuentre en estado de indefensión y al que se pueda causar un perjuicio irremediable, podrá acudir al juez constitucional en defensa de la prerrogativas conculcadas como mecanismo transitorio, siempre y cuando no disponga de otro medio de defensa judicial. La vía constitucional no sustituye los mecanismos ordinarios principales, ni modifica las reglas de la competencia de los jueces, ni crea instancias adicionales a las existentes.

2. El problema jurídico a dilucidar, se circunscribe a verificar si la cuestionada Seguros del Estado S.A., ha vulnerado el derecho fundamental de petición del señor Luis Eduardo Ramírez Cortes.

3. El derecho de petición, como una prerrogativa fundamental expresamente consagrada en el artículo 23 de la Carta Política de Colombia, surge como un mecanismo para obtener una respuesta por parte de una autoridad pública o privada, cuya decisión debe ser de fondo, clara y precisa. Los pronunciamientos tardíos y ambiguos no constituyen una contestación efectiva, ya que lesionan el núcleo esencial de dicho derecho, puesto que no se obtiene una solución a lo peticionado.¹

La Jurisprudencia Constitucional ha identificado, que el núcleo esencial del derecho de petición incluye: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar en términos respetuosos solicitudes ante las autoridades públicas y los particulares; b) el destinatario tiene la obligación de tramitar y resolver las peticiones incoadas dentro de los términos señalados por la Ley; c) la resolución debe ser clara, precisa y consecuente con las peticiones elevadas, no es admisible las respuestas evasivas; d) el contenido de la respuesta puede ser favorable o desfavorable a lo pedido; y e) se debe notificar la contestación dada, en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso.²

Frente a los términos para resolver los derechos de petición, el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 prevé que las peticiones de orden general deberán resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Exceptuando las peticiones de documentos y de información que deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Términos que fueron modificados dentro del marco de la emergencia económica, social y ecológica desatada por la pandemia del coronavirus del Covid – 19. El artículo 5 del Decreto 491 de 2020, señala que todas las peticiones que se presente durante tiempo que dure la emergencia deberán resolverse dentro de los (30) días siguientes a su recepción. Las que sólo se traten de peticiones de documentos y de información se resolverán dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

De igual forma, la Corte Constitucional en varios pronunciamientos ha precisado que los elementos estructurales del derecho de petición, se limitan a establecer que: (i) toda persona natural y/o jurídica podrá presentar peticiones respetuosas de interés general o particular, (ii) la solicitud podrá realizarse de forma verbal o escrita, y (iii) no se requiere invocar una técnica específica para incoarlo.³

¹ Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

² Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 11001030600020150000200 (2243), ene. 28/15, C. P. Álvaro Namén Vargas

³ "...Elementos que conforman el derecho fundamental de petición (...) Esta Corporación se ha pronunciado sobre los elementos estructurales que componen el derecho de petición. Particularmente, en la sentencia C-818 de 2011, reiterada por la C-951 de 2014, se refirió a los siguientes elementos: (...) Toda persona tiene derecho a presentar peticiones a las autoridades por motivos de interés general (...) Tanto las personas naturales como las jurídicas son titulares del derecho fundamental de petición (...) La petición puede ser verbal o escrita (...) La Corte ha

4. Ahora bien, en cuanto a la reserva de la información solicitada, la mencionada corporación, en sentencian T-726 de 2016, expresó lo siguiente:

“...Ahora bien, en cuanto al artículo 33 de la Ley 1755 de 2015, es la expresión legal de la primera regla establecida por esta Corte frente a la procedencia del derecho de petición ante organizaciones privadas, la cual comprende las peticiones presentadas a las entidades privadas que presten un servicio público o desarrollen actividades que comprometan el interés general, dado que de una parte, la norma enuncia de manera enfática a organizaciones privadas que desempeñan esas labores “las Cajas de Compensación Familiar, a las Instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, a las entidades que conforman el sistema financiero y bursátil y a aquellas empresas que prestan servicios públicos y servicios públicos domiciliarios” y de otro lado, esa concepción justifica que además de aplicarse las reglas generales del derecho de petición ante autoridades, también se le apliquen las especiales, pues como en razón de sus funciones son muy similares a las entidades públicas, es factible que alguna información y documentos sean susceptibles de reserva. En las hipótesis que regula el artículo 33 el derecho de petición amplía su ámbito de protección en tanto no se limita a aquellos casos en los que dicha garantía se ejerce como medio de protección de derechos fundamentales, sino que en atención al tipo de actividades desarrolladas por los particulares a los que se refiere dicha disposición, surge un interés de los ciudadanos que puede resultar análogo al existente cuando se formulan requerimientos ante autoridades públicas.

(...) “La información privada es aquella que se encuentra en el ámbito propio del sujeto concernido y, por ende, sólo puede accederse por orden de autoridad judicial competente y en ejercicio de sus funciones. Entre dicha información se encuentran los libros de los comerciantes, los documentos privados, las historias clínicas, los datos obtenidos en razón a la inspección de domicilio o luego de la práctica de pruebas en procesos penales sujetas a reserva, entre otros”. (Negrilla fuera de texto)

En este orden de ideas, el informe de daños que elabora el ajustador de seguros hace parte de la correspondencia de los negocios de la aseguradora y en virtud de ello, debe estimarse como un papel del comerciante, toda vez que carece de relevancia financiera externa, al contener una información que por su naturaleza solo reporta algún tipo de beneficio a la aseguradora, pues el concepto puede ser utilizado para objetar una reclamación y, en esa medida, eximirse de responsabilidad ante la ocurrencia de un siniestro, solo en caso de probarse.

En síntesis, el ajustador de seguros es una persona natural o jurídica, que puede ser designada por el asegurador, asegurado o de manera conjunta por los anteriores, pero independiente de ellas – no las representa –, con conocimientos técnicos suficientes para verificar (i) la ocurrencia de un siniestro, (ii) las causas del mismo, (iii) la cobertura del riesgo sufrido y (iv) la indemnización a que hubiere lugar; cuya labor culmina con la realización de un informe detallado, que no obliga a las partes, en el que se conceptúa sobre el reconocimiento o no de la póliza adquirida.

señalado que el artículo 23 de la Norma Superior no hace ninguna diferenciación entre las peticiones presentadas de forma verbal y las escritas, en esa medida los dos tipos de solicitudes se encuentran amparadas por el derecho fundamental de petición (...) Las peticiones deben ser formuladas de manera respetuosa (...) Este Tribunal ha establecido que las solicitudes solo tienen el amparo constitucional cuando son presentadas en términos respetuosos. Particularmente la sentencia T-353 de 2000, resaltó el deber de respeto a la autoridad ante la cual se presenta la petición, pues de lo contrario la obligación de responder no nace a la vida jurídica. En este sentido, de forma excepcional es posible rechazar una solicitud que se considere irrespetuosa, sin embargo, esta interpretación es restrictiva, en consideración a que no toda petición puede tacharse de esa manera para sustraerse de la obligación de dar una respuesta de fondo (...) La informalidad de la petición (...) La Corte ha insistido en diferentes oportunidades que el derecho de petición se ejerce a pesar de que las personas no lo digan de forma expresa. En este sentido, si una autoridad exige que se diga específicamente que se presenta una solicitud de petición en ejercicio de este derecho, impone al ciudadano una carga que no se encuentra prevista en la ley ni en la Constitución Política...”. Sentencia 238 de 2018.

Dicho documento hace parte de los denominados papeles del comerciante, comoquiera que es de uso privado, pues su contenido solo incumbe a quien contrata los servicios del ajustador y al ser una información que carece de relevancia financiera externa, su contenido es reservado....”

5. En el caso concreto, el accionante Luis Eduardo Ramírez Cortes dijo, que el 4 de junio de los corrientes, radicó ante Seguros del Estado S.A. derecho de petición, consistente en que, “...1.1. Solicitamos se nos entregue copia de la decisión o en el fallo que dice la administración y el Consejo de Administración fue tomado por Seguro del Estado, y que aparentemente les fue comunicada la última semana de mayo a estos, frente a la investigación y reclamación de la póliza de cumplimiento a favor de la Agrupación de Vivienda Quintas de Santa Barbara V Etapa y la empresa representada por el señor Andrés Alejandro Ortiz, representante de Consultoría Integral AOH SAS (...)

1.2. Que de no existir decisión alguna respecto de la investigación de dicho siniestro se nos informe por escrito (...)

1.3. Dicha petición se hace para garantizar el debido proceso de la copropiedad, quienes tenemos el derecho a conocer las decisiones tomadas frente a un proceso que compete a nuestra copropiedad y del cual se nos está negando se conocimiento...”; empero, omitió acompañar dicha reclamación al momento de impetrarse el libelo.

No obstante a lo anterior, al momento de contestarse la acción de tutela, Seguros del Estado S.A. indicó que el pasado 9 de junio de los corrientes dio respuesta el requerimiento del actor, allegando la remisión efectuada al correo electrónico indicado en el escrito introductor, donde se precisó que “...en atención al Derecho de Petición radicado ante Seguros del Estado S.A. desde el pasado 04 de junio de la presente anualidad, en virtud de la cual, requiere información particular respecto al trámite de la solicitud de indemnización adelantada ante esta Compañía de Seguros bajo la póliza de cumplimiento particular N°02-45-101000152, nos permitimos informar lo siguiente:

Según se desprende de la información remitida en su escrito, se requiere copia de la comunicación emitida por parte de esta Aseguradora, donde consta la posición definitiva adoptada respecto a la posible afectación de la póliza descrita en el asunto.

Sobre el particular, se establece que, tal información ya ha sido debidamente remitida y notificada tanto a la apoderada especial de la copropiedad Asegurada como a su representante legal, exaltando que ya tienen conocimiento pleno de esta.

Vale la pena señalar que, la mencionada información no podrá ser otorgada directamente a ustedes como copropietarios por parte de Seguros del Estado S.A., teniendo en cuenta que la notificación directa de las comunicaciones que han surgido del trámite de afectación del caso particular han sido realizada a quien actúa como representante legal de la AGRUPACION DE VIVIENDA QUINTAS DE SANTA BARBARA V ETAPA, encontrándose legitimada para proponer y solicitar la información correspondiente.

No obstante, lo anterior, me permito adjuntar la remisión del Derecho de Petición elevado ante esta Aseguradora, dirigido a la Representante Legal de la Copropiedad con el fin de que sea quien en virtud de sus calidades les otorgue la información requerida...”

Bajo dicha primicia, se tiene que el citado requerimiento fue contestado en términos (9 de junio de 2020), pues fíjese que el lapso de tiempo que tiene la encartada, de acuerdo a lo previsto en la norma en cita,⁴ y en el Decreto 491

⁴ “...Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente...”.

del 28 de marzo de 2020 dictado por el Gobierno Nacional dentro del marco de la emergencia económica, social y ecológica,⁵ aunado a la naturaleza el requerimiento, corresponde a los treinta (30) días siguientes a la recepción del competente, es decir, que al momento de la interposición de esta tutela, que fue el día 28 de septiembre de 2020 (ver Acta Individual de Reparto), ya se había dado respuesta antes de que se venciera dicho lapso (22 de julio del año que avanza).

Sumado a lo anterior, es menester precisar que el derecho de petición incoado por el señor Luis Eduardo Ramírez Cortes no ha sido trasgredido por la encartada Seguros del Estado S.A., en la medida que este no es el titular de la información que atañe a la póliza de cumplimiento otorgada por la entidad cuestionada, por ende, resulta improcedente y contrario a la normatividad que regula el tema, divulgar datos de un tercero sin su consentimiento o en ausencia de una orden judicial, máxime cuando *“...la jurisprudencia de la Corte Constitucional define la información privada como aquella que se encuentra en el ámbito propio del sujeto a quien le incumbe y, por ende, sólo puede accederse a ésta por orden de autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones. La información personal comprende la relacionada con los libros de los comerciantes, los documentos privados, las historias clínicas, la información extraída a partir de la inspección del domicilio o luego de la práctica de pruebas en procesos penales sujetas a reserva . De igual forma, tiene naturaleza de información privada “la información genética que reposa en bancos de sangre, esperma, laboratorios, consultorios médicos u odontológicos o similares”. La Corte ha advertido que en los eventos aludidos, esta información revela facetas importantes de la vida personal, social y económica del individuo y que, debido a expresa disposición constitucional o por su propia naturaleza, solo puede ser divulgada por autorización de la persona a la que se refiere, o por la existencia de una decisión judicial....”*⁶

En punto, cabe destacar que la Aseguradora cuestionada en oportunidad le manifestó al petente las razones por las cuales no era viable acceder a su petición, teniendo en cuenta el carácter de reserva y confidencialidad de la documental requerida; por tanto, se entiende que la reclamación interpuesta fue debidamente atendida por la acusada, en la medida que se absolvió la misma de forma negativa.

Recuérdese que cuando se habla de pronta resolución, se quiere decir que el destinatario, ante el cual se haya elevado la petición está obligado a resolverla, y el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso, luego en esa medida, podrá ser negativa o positiva.⁷

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley;

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo invocado por el señor **Luis Eduardo Ramírez Cortes**, contra **Seguros del Estado S.A.**

⁵ Estado de Emergencia prorrogado hasta el día 30 de noviembre de 2020, de acuerdo a la Resolución 1462 de 2020 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Consulta efectuada de la página web del citado Ministerio.

<https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Mediante-resolucion-se-extiende-emergencia-sanitaria-en-Colombia.aspx#:~:text=%E2%80%8BLa%20Resoluci%C3%B3n%201462%20contempla,el%20pr%C3%B3ximo%2030%20de%20noviembre.&text=Bogot%C3%A1%2C%2026%20de%20agosto%20de,el%20pr%C3%B3ximo%2030%20de%20noviembre.>

⁶ Sentencia T-114/18

⁷ Sentencia No. T-392/94

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR en su oportunidad las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en el evento que no fuere impugnado.

NOTIFÍQUESE,

**MARLENNE ARANDA CASTILLO
JUEZ**

Firmado Por:

**MARLENE ARANDA CASTILLO
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 057 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**bd11b1af4fcc5b72c0d9045d4cf050e7a1b569cfc1f2e49da4ef25fb3055bcd
e**

Documento generado en 08/10/2020 12:00:28 p.m.